

NUE 159-A-2019 (AG)

**Meléndez Córdova contra Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(MINEDUCYT)**

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con veintisiete minutos del seis de enero de dos mil veinte.

Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Elva de Jesús Meléndez Córdova**, en contra de la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)**, a su resolución de la solicitud de información N° MINED – 2019-0322, de fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, en la que se denegó el acceso a la información consistente en: *"copia certificada del nombre, cargo y grado asignado de toda la planta docente de la Escuela Nacional Rural Mixta La Ponderosa (hoy llamada Centro Escolar San Nicolás, Urbanización La Ponderosa) del municipio de Apopa de 1990 a 2008"*.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

La oficial de información del **MINEDUCYT** resolvió informarle que no se puede entregar la información requerida, debido a la falta de respuesta de la Dirección Departamental de Educación de San Salvador.

Durante la etapa de instrucción, en plena observancia y respeto al derecho de defensa y audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se requirió al **MINEDUCYT** que rindiera su informe. En dicho informe para mejor proveer se adjuntó nota de la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, en la cual se informa que en la Coordinación de Desarrollo Humano de dicha Dirección Departamental no se encuentra registro de la planta docente del referido Centro Escolar.

En esta línea de ideas, finalizada la etapa de instrucción, se realizó la audiencia oral en la fecha y hora señalada, con la comparecencia de ambas partes.

[Handwritten signature]

Análisis del caso:

Para resolver la controversia se analizará el caso de la siguiente manera: a) breve referencia respecto del derecho de acceso a la información pública (DAIP); b) valoración de la prueba aportada; c) análisis sobre la inexistencia de la información y la aplicación de la normativa al caso en concreto.

a) La libertad de información asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, de manera que, en cuanto miembros de la colectividad puedan tomar decisiones libres y debidamente informados. La referida libertad se manifiesta en dos derechos: *(i) el de comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión; y (ii) el de recibir o acceder a dicha información en igualdad de condiciones.*

En la Constitución, la libertad de información se encuentra adscrita a la disposición constitucional que estatuye la libertad de expresión —art. 6 inc. 1^o—, la cual establece que: "Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos...". Y es que, tal como se determinó en la sentencia del 5-XII-2012, emitida en el proceso de Inc. 13-2012, la libertad de expresión tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que sean de interés para la colectividad; situación que además, es reconocida en similares términos en el ámbito internacional, específicamente, en los arts. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹.

El derecho a recibir información implica el libre acceso de todas las personas a las fuentes en las cuales se contienen datos de relevancia pública. La protección constitucional de la búsqueda y obtención de información se proyecta básicamente frente a los poderes públicos —órganos del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades—, y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la Administración en general, pues existe un

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional. Proceso de amparo 356-2012; 17 de enero de 2014.

principio general de publicidad y transparencia de la actuación del Estado y de la gestión de fondos públicos².

b) La prueba es aquella actividad que desarrollan las partes o el Tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso³.

La prueba se encuentra regida por los principios de pertinencia, idoneidad o contundencia y utilidad. Estos principios representan una limitación al principio de libertad de la prueba; sin embargo, son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o en la reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan en lo absoluto para los fines propuestos y parezcan claramente impertinentes.

En este contexto el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme con el artículo 102 de la LAIP, contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de las pruebas presentadas por las partes: la pertinencia y la utilidad. En cuanto a la **pertinencia**, el artículo 318 del CPCM, establece que no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la **utilidad**, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Bajo estas consideraciones, la apelante durante el desarrollo del presente procedimiento incorporó documentación para ser agregada al expediente; y como medio probatorio solicitó y ofreció la copia certificada de su expediente académico, el cual contiene información sobre sus estudios cursados en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación y Desarrollo Social, la cual cursó entre 1987 y 1990.

En razón de lo anterior, por medio de auto emitido por este Instituto a las ocho horas con treinta y dos minutos del diecisiete de septiembre del 2019, se requirió a la Universidad Pedagógica de El Salvador Dr. Luis Alonso Aparicio, lo solicitado por la ciudadana,

² Ídem.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso de declaratoria de legalidad 204-2009; 04 de diciembre 2013.



obteniendo respuesta en fecha 30 de octubre de 2019, por medio de nota suscrita por la Directora de Administración Académica.

Respecto a dicha información, este Instituto considera que la documentación ofrecida por la apelante y requerida por este Instituto a la Universidad antes mencionada, cumple con los extremos de pertinencia y utilidad, puesto que, la apelante en el presente procedimiento ha expuesto haber sido maestra y directora de dicho centro escolar; razón por la cual solicita su planta docente; lo cual, conlleva una conexión con el objeto de controversia del presente caso.

La documentación ofrecida por el ente obligado, consistente en copia simple de los siguientes documentos: a) nota de la Dirección Departamental de San Salvador, en el cual se informa que en la Coordinación de Desarrollo Humano de dicha Dirección Departamental no se encuentra registro de la planta docente del referido Centro Escolar; b) memorándum con referencia DNES-GRIYAL-131-09-2019, por medio de la cual se establece que la apelante no aparece con ningún tipo de trámite en los Sistemas que se llevan en la Gerencia de Registro, Incorporación y Asistencia Legal; c) nota suscrita por el rector de la Universidad Pedagógica de El Salvador “ Dr. Luis Alonso Aparicio”, por medio de la cual se ilustra la situación académica de la apelante; d) memorando DDH-M-491 relacionado al informe solicitado de planta docente del 13671- Centro Escolar La Ponderosa del Municipio de Apopa, departamento de San Salvador; e) planta de personal docente del Centro Escolar La Ponderosa; f) planta del personal docente del Centro Escolar Cantón San Nicolás; y, f) memorando con referencia DDH-M-667, en el cual se expone que la apelante no posee número de identificación profesional que la acredite como docente escalonada; es importante manifestar que la admisión de la misma se realizó durante la audiencia oral, por cumplir con los requisitos establecidos en la normativa antes mencionada.

Dichos elementos probatorios, serán apreciados bajo el sistema de valoración de la prueba denominado “**sana crítica**”, el cual implica que el juzgador debe emplear las reglas de la experiencia, lógica, historia, psicología, imaginación; para que al concluirse un proceso

se administre justicia con más acierto, ya que la prueba será valorada de acuerdo con lo dicho y para el caso concreto⁴.

En razón de lo anterior las pruebas presentadas por ambas partes brindan certeza sobre los hechos relacionados a la inscripción de la ahora apelante en la carrera universitaria expresada por **Meléndez Córdova**, así como, que si bien se inscribió en dicha Universidad, la ahora apelante – según lo dicho en la constancia-, no cumplió con los requisitos establecidos por el centro de educación superior para obtener el grado de egresada. Por lo anterior, se advierte que la ahora apelante no aportó en este procedimiento el respaldo que la acredite académicamente como docente.

Sin embargo, a pesar que la ciudadana no acreditó su formación académica, dicho requisito no es indispensable para poder acceder a la información solicitada; puesto que la información requerida no se centra en la información personal de la apelante. En consecuencia, lo expuesto en relación a su expediente académico fue un hecho expresado y controvertido por ambas partes en relación a la existencia o no de la información académica de la ciudadana; más no así de la existencia o no de la información solicitada.

c) De acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la LAIP, cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el o la oficial de información tomara las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

En tal sentido, el propósito de dicha declaratoria es garantizar que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que las mismas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso en concreto; es decir, dar certeza a la solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada, y de mostrar que la denegatoria no obedece a criterios arbitrarios.

Como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, este Instituto ya ha reconocido las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 73-2009; 27 de junio de 2013.



su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria⁵.

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto⁶, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

En razón de lo anterior es importante mencionar que según la normativa que regula la profesión docente se advierte por mandato legal el registro escalafonario, como control sistemático, actualizado y confiable del Magisterio Nacional del cual es responsable el **MINEDUCYT**⁷. Dicha normativa establece que el Magisterio Nacional lo conformarán los educadores inscritos a la fecha de entrar en vigencia la presente ley y los que posteriormente

⁵ Instituto de Acceso a la Información Pública. Apelación 39-A-2013. 28 de octubre de 2013.

⁶ Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia: NUE 143-A-2017, (El Salvador, 2017).

⁷ Ley de la Carrera Docente. Artículo 6. 7 de marzo de 1996.

lo hagan con arreglo a la misma; pero previo a la vigencia de dicha normativa, la Ley del Escalafón del Magisterio Nacional, establecía que en el registro escalafonario se inscribirá a todos los educadores aptos para el ejercicio de la profesión magisterial⁸; en consecuencia, nuestra legislación ha regulado la existencia del registro de educadores bajo ciertos parámetros.

Además de lo anterior, el ente obligado presentó un listado de docentes que actualmente laboran en el centro escolar objeto de la controversia, que en algunos casos ingresaron antes y durante el periodo solicitado, por lo que parte de la información, se encuentra en ese listado, faltando aquellos docentes que estuvieron en ese lapso de tiempo y que ya no se encuentran laborando en ese lugar; por lo que no es viable el argumento de la inexistencia planteada en un primer momento por el ente obligado, pues parte de la información como se ha demostrado se encuentra en sus registros. En ese sentido, es procedente que delimiten dicha lista a las personas que entraron en el periodo solicitado y que siguen aún en el centro escolar

Ahora bien, en cuanto a los docentes que ya no laboran en dicho centro, es preciso señalar que el **MINEDUCYT** tiene la obligación legal de contar con dicha información, dentro de sus registros, pues también es base para el historial laboral social de dichas personas. Es por ello, que posterior al análisis de la inexistencia de la información, se ha determinado a través de la sana crítica, que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones del ente obligado, y ésta deberá generarse con otro tipo de registro que tenga dicho ente obligado, ya sea en la Departamento de Recursos Humanos, en los registros propios del centro escolar, o en otros que podría objetivamente tener dicha información.

En razón de lo anterior, el artículo 42 de la Ley de la Carrera Docente establece: “el Ministerio de Educación, a través de la unidad de recursos humanos será el responsable de la administración del escalafón magisterial y del Registro Escalafonario; esto no impedirá que dicho registro pueda administrarse descentralizadamente en la forma que determine el Ministerio de Educación”.

⁸ Ley del Escalafón del Magisterio Nacional. Artículo 21. 19 de julio de 1971.



En ese sentido, es pertinente ordenar que se entregue: *"El nombre, cargo y grado asignado de toda la planta docente de la escuela nacional rural mixta La Ponderosa, hoy llamada Centro Escolar San Nicolás, de urbanización La Ponderosa del municipio de Apopa de 1990 a 2008"*, que incluya la delimitación de la listado presentado a este Instituto de los docentes que laboran y entraron en el periodo solicitado y complementarlo con la generación del listado de aquellos que han dejado de laborar en dicho centro, a través de una nueva búsqueda en los registros, tal como se ha determinado en párrafos anteriores. Esto deberá realizarse a través del oficial de gestión documental y archivo, que deberá documentar mediante acta y entrevistas (de proceder) para la generación de esta información., y en caso de no encontrar la información que ayude a ese propósito, lo hará constar, para que la oficial de información emita una resolución que confirme su inexistencia, sobre los docentes que han dejado de laborar en el centro y estuvieron en el periodo solicitado.

Sobre la modalidad solicitada se deberá generar ese listado, que deberá quedar resguardado en sus registros, firmado por la persona encargada de recursos humanos del **MINEDUCYT** y sobre el emitir la respectiva certificación, independientemente se complete o no la información.

Decisión del caso:

a) **Revocar** la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED)**, debido a que existe disposiciones legales que amparan la existencia de la información solicitada por la apelante.

b) **Ordenar** al **MINED**, que en el plazo de **ocho días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue a **Elva de Jesús Meléndez Córdova**: *"Copia certificada del documento que contenga el nombre, cargo y grado asignado de toda la planta docente de la escuela nacional rural mixta La Ponderosa, hoy llamada Centro Escolar San Nicolás, de urbanización La Ponderosa del municipio de Apopa de 1990 a 2008"*, que incluya la delimitación de la listado presentado a este Instituto de los docentes que laboran y entraron en el periodo solicitado, y complementarlo con la generación del listado de aquellos que han dejado de laborar en dicho centro, a través de una nueva búsqueda en los registros, tal como se ha determinado en esta resolución. Esto deberá realizarse a través del oficial de gestión documental y archivo, que deberá documentar

mediante acta y entrevistas (de proceder) para la generación de esta información, y en caso de no encontrar la información que ayude a ese propósito, lo hará constar para que la oficial de información emita una resolución que confirme su inexistencia, sobre los docentes que han dejado de laborar en el centro y estuvieron en el periodo solicitado, la cual deberá notificarla en el mismo periodo.

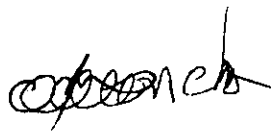
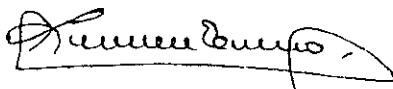
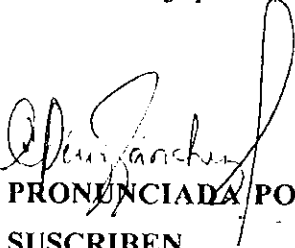
c) **Ordenar al MINED** que remita a este Instituto un informe de cumplimiento, en el plazo de veinticuatro horas vencido el plazo para la entrega de la información a la apelante, que incluyan todas las diligencias efectuadas, la entrega de la información o notificación a la apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento sancionatorio respectivo. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) **Entréguese a Elva de Jesús Meléndez Córdova**, la información original remitida por la Universidad Pedagógica de El Salvador "Dr. Luis Alonso Aparicio" debido a que es información personal.


Notifíquese.



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los trece días del mes de enero de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

